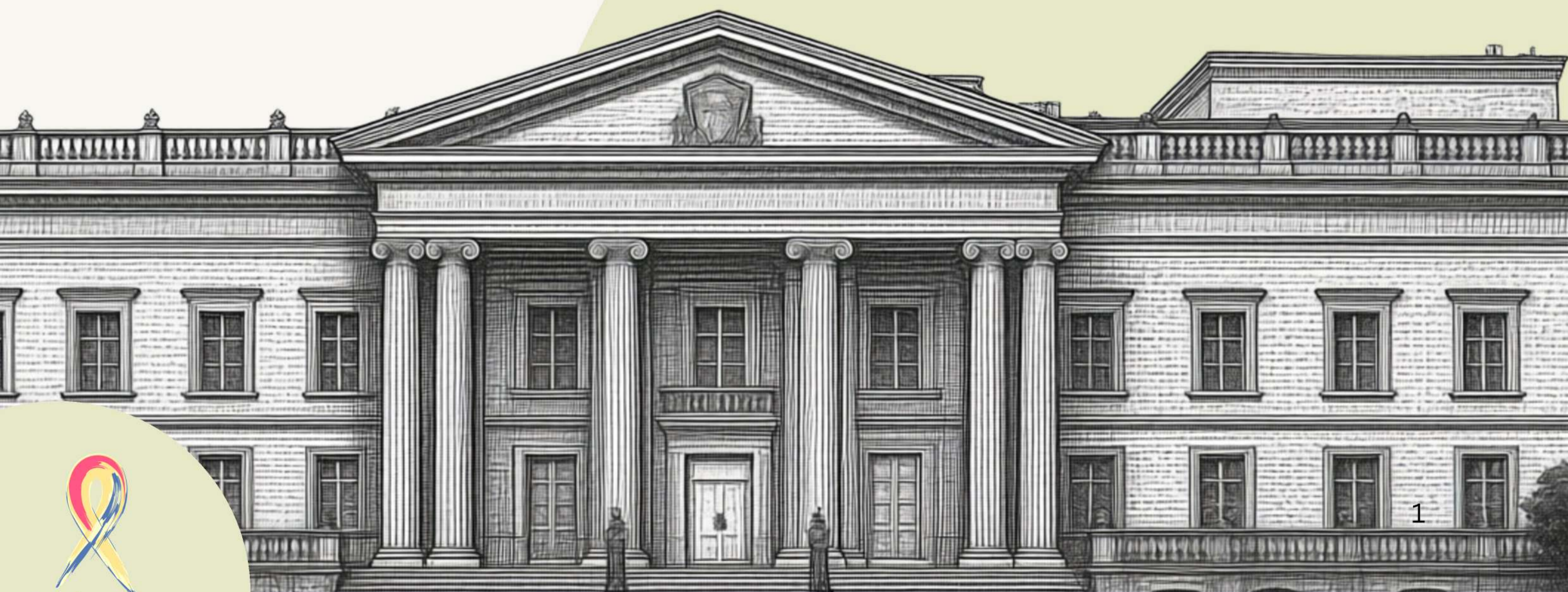


¿Qué proponen las campañas presidenciales sobre política de drogas y narcotráfico?

Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz

Por: Salomón Majbub Avendaño

Mayo de 2026



¿Qué proponen las campañas presidenciales sobre política de drogas y narcotráfico?

Para Colombia en cada elección presidencial hay temas fundamentales que dan altas y bajas para las campañas de quienes compiten por el poder. La paz, la seguridad, la economía y lo asociado al narcotráfico son debates sensibles que agitan a la opinión pública y pueden sumar o restar apoyos a los proyectos políticos en contienda. En muchas ocasiones los candidatos y candidatas presidenciales terminan diciendo en campaña sobre esos temas lo que la masa de votantes quiere escuchar para su tranquilidad, así lo que se diga no pueda realizarse, o cuando acceden al poder terminen ejecutando políticas en esas materias diferentes a las anunciadas en plazas públicas, debates y programas de gobierno.

Así ocurre con los temas relacionados a las políticas de drogas y las economías de la coca, cocaína y marihuana. Dependiendo el norte político de los candidatos, como los que se ubican a la izquierda o “centro izquierda” del espectro político, se juegan por propuestas de replantear el paradigma prohibicionista, desarrollo rural, sustitución de cultivos de uso ilícito voluntaria, no utilización de estrategias como la fumigación con glifosato u otros herbicidas que afectan la salud y los ecosistemas, soberanía nacional para ejecutar políticas de drogas autónomas. Los que se ubican a la derecha, al extremo de la derecha y el “centro derecha” sus propuestas circulan entre la erradicación forzada, el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato - así estas estén condicionadas y no se puedan hacer, sustitución de cultivos de manera obligatoria y una clara subordinación del país y su soberanía frente a los Estados Unidos para apoyo militar al combate contra esas economías.

De cara a las elecciones presidenciales que tendrá el país el próximo domingo 31 de mayo para elegir nuevo presidente o presidenta de Colombia del 2026 al 2030, el ODEI de Indepaz presenta este instrumento para conocer lo que proponen las campañas presidenciales de Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo en materia de política de drogas y transformación de economías ilícitas derivadas de cultivos declarados ilícitos como la coca y el cannabis. Esto con el fin de contribuir a decisiones electorales informadas y exigir a los representantes políticos que quieren ganar la presidencia que se eleve el debate sobre los impactos de las políticas de drogas y las economías regionales de la coca, cocaína y marihuana en poblaciones, territorios y conflicto interno; y posteriormente, se construya política pública en esa materia basada en evidencia y sin desconocer lo que el debate público ha avanzado al respecto.

Cuadro comparativo temáticas y programas de gobierno

Criterio / Candidato	Iván Cepeda y Aida Qilcue (El poder de la verdad)	Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (Firmeza para estabilizar. Corazón para transformar. Visión para el futuro)	Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (El milagro de los nunca)	Claudia López y Leonardo Huerta (Una nueva historia de soluciones para la gente)	Sergio Fajardo y Edna Bonilla (Cambio. Serio. Seguro)
Utilización de Glifosato (fumigación aérea y/o terrestre)	Rechazo total. Se oponen a la fumigación aérea por considerar que sacrifica la ecología, afecta la salud y destruye los ecosistemas; además de afectar al campesinado, comunidades rurales y erosionar la legitimidad del Estado.	A favor. Proponen reactivar la fumigación aérea en zonas de cultivos ilícitos industriales, asegurando no afectar la salud ni los ecosistemas.	A favor. Defienden el uso de la fumigación aérea como una de las herramientas tecnológicas y legales clave para erradicar 330.000 hectáreas de coca.	No hay mención a uso del glifosato en su programa de gobierno.	No hay mención a uso del glifosato en su programa de gobierno.
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	Sustitución voluntaria. Promueven una transición concertada acompañada de inversión social y el fortalecimiento de las economías campesinas y populares.	Hablan de sustitución forzosa. El campesino debe acabar el cultivo ilícito, pero se le apoyará con cultivos lícitos y se le hará socio de empresas donde puedan hacer transformación de sus materias primas.	Entienden la sustitución como una estrategia para erradicar cultivos. La incluyen dentro del paquete de herramientas de erradicación junto a la erradicación manual. Sin embargo, no es esta la primera opción sino una de las últimas.	La abarcan desde lo ambiental, más pensada para territorios de vulnerabilidad ambiental como la Amazonía. Apuestan con eso a la conservación y restauración con énfasis en pagar ingresos a campesinos e indígenas por conservar la selva y restaurar áreas degradadas para combatir cultivos ilícitos.	No contemplan la sustitución directamente en su programa; hablan de un desarrollo integral en clave de recuperar control territorial en zonas críticas.
Desarrollo y Transformación Rural	Este criterio es principal en el programa de gobierno. La propuesta es transformar productivamente territorios con presencia de cultivos de uso ilícito y fortalecer la inversión social en esos lugares, así poder sustituir el modelo de militarización territorial. La transformación rural con enfoque de justicia social y ambiental.	Buscan hacer la legalidad más rentable que el crimen integrando a los campesinos como socios en la cadena de valor y transformación.	No se mencionan propuestas específicas de desarrollo rural; sus enfoques se orientan a la persecución de capitales provenientes del narcotráfico y la limpieza institucional para evitar corrupción motivada por dinámicas de narcotráfico.	Sus propuestas van en clave de fortalecer lo ambiental y regional. Proponen que todo el capital ilegal incautado a las mafias sea estrictamente reinvertido en el desarrollo de las regiones afectadas.	Proponen implementar proyectos de infraestructura, servicios públicos, salud, educación y comunicaciones coordinados por gerentes regionales; todo desde un instrumento que serían Planes de Bienestar Territorial.
Regulación de economías de la coca-cocaína y marihuana (Ruptura/continuidad del Paradigma Prohibicionista)	Hacen planteamientos y reflexiones sobre el fracaso del prohibicionismo y la necesidad de superar ese paradigma, avanzando en regulación inteligente y fortalecimiento de acceso y enfoque de salud pública de la política de drogas.	Se mantienen en las líneas del prohibicionismo, militarizar territorios con presencia de cultivos de uso ilícito y priorizar estrategias de erradicación forzada.	Apuestan por fortalecer el prohibicionismo enfocando su política de lucha contra el narcotráfico en erradicación forzada por medio de fumigaciones aéreas y terrestres, extradiciones, extinción de dominio exprés, cárcel y persecución de los capitales de los narcotraficantes.	Apuestan combatir al narcotráfico y sus economías desde un enfoque Judicial Antimafia. proponen la creación de una Fiscalía Antimafia con mínimas garantías, máximas sanciones y aislamiento indefinido para capos del narcotráfico.	Fortalecimiento de la inteligencia financiera. Proponen un enfoque regulatorio penal centrado en atacar en los primeros 100 días el lavado de activos mediante el trabajo conjunto de Fiscalía y UIAF.
Política Exterior	Sus propuestas señalan a impulsar la autonomía de Colombia frente a la política de drogas y de generar integraciones regionales. Entre las propuestas está convocar una conferencia internacional para discutir sobre el fracaso de prohibicionismo y construir nuevos paradigmas desde las alianzas estratégicas regionales con países como México.	Proponen una subordinación estratégica a Estados Unidos, principalmente, para el combate militar de estas economías ilegales.	Proponen una cooperación penal centrada en la aplicación de la extradición como mecanismo internacional contra narcotraficantes.	Proponen reformar el régimen internacional de drogas apostando por la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, y el fortalecimiento de la cooperación internacional para perseguir al crimen organizado y el lavado de activos.	Proponen impulsar una Integración Regional Efectiva y ñponer a Colombia como líder de una agenda en América Latina y el Caribe para cooperar en seguridad fronteriza y combatir el crimen transnacional y el narcotráfico.
Relaciones con Estados Unidos	Sus propuestas van hacia la ruptura con el modelo de política de drogas impuesta por Estados Unidos, la cual señalan es una estrategia para acceder a los recursos naturales del país y la región. Se propone una relación de coresponsabilidad Colombia-Estados Unidos y no de sumisión de Colombia hacia Estados Unidos y sus mecanismos de chantaje desde la certificación y extradición unilateral. La propuesta es construir una política de drogas que responda a los intereses de Colombia y no a los de Estados Unidos.	Proponen solicitar la integración de Colombia al "Escudo de las Américas" para recibir apoyo tecnológico, entrenamiento militar y revivir el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, lo que implica estrechar las relaciones con Estados Unidos y subordinar la política de drogas a sus condiciones para acceder a esos apoyos.	En el programa no tienen una mención puntual a la relación con Estados Unidos frente al combate al narcotráfico, aunque proponen una alineación estratégica con ese país para la extradición como herramienta de castigo a narcotraficantes.	No hay mención explícita de la relación de Colombia y Estados Unidos frente a la política de drogas en su programa de gobierno.	No hay mención explícita de la relación de Colombia y Estados Unidos frente a la política de drogas en su programa de gobierno.



Lo expuesto en los programas de gobierno revisados, dan cuenta de unas propuestas en materia de política de drogas y narcotráfico que no se mueven de los parámetros establecidos por décadas como la dicotomía entre la sustitución de cultivos y/o la erradicación forzada.

¿Cambio en el Cambio?

Aunque de los programas consultados, el de la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue es el que introduce más elementos para comprender los fracasos y costos que ha tenido la aplicación de la política de drogas desde el paradigma prohibicionista, con el fin de avanzar en escenarios de consenso nacional e internacional para superar esa vieja fórmula, sus apuestas gruesas siguen la línea trazada por el gobierno de Gustavo Petro, la cual entrega toda esperanza de superación de violencias en Colombia por cuenta de las economías ilegalizadas de la coca, cocaína y cannabis a la sustitución de cultivos. Por supuesto, hay claros enfoques en profundizar las transformaciones territoriales y desarrollar las regiones con presencia de estas economías desde la continuidad de la reforma agraria y el impulso de hacer productivos esos territorios fortaleciendo economías campesinas y populares, no en detrimento de estos como se ha desarrollado la política neoliberal del campo colombiano las últimas décadas.

Del qué al cómo...

Claudia López y Sergio Fajardo no ahondan ni explican cómo debería ser una transformación territorial para combatir economías de la cocaína, se limitan en sus programas a proponer, por el lado de López, reinvertir en las regiones dineros incautados a las mafias; mientras Fajardo menciona Planes de Bienestar Territorial para enfrentar el narcotráfico. No obstante, quedan vacíos de cómo estas apuestas podrían fortalecer realmente la producción campesina, acceso a tierras, generación de comercio y mercado de economías lícitas provenientes de territorios que hagan tránsito de economías ilegales a legales.

Otra vez guerra antidroga

Por los lados de la derecha y extrema derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el libreto no contempla nada diferente a estrategias que han demostrado, con toda evidencia, fracasos reiterados, donde la transformación territorial no hace parte de sus agendas sino limitar a ofrecerle al campesino programas de sustitución sin cambiar estructuras agrarias y de relación económica.



La fumigación aérea es un tema central y populista. Esta ya ha sido condicionada desde 2015 y desde entonces ningún gobierno ha podido cumplir con los requerimientos impuestos por la Corte Constitucional si se quiere reactivar. Iván Duque gastó sus 4 años de gobierno tratando de fumigar y no pudo hacerlo. En ese sentido las propuestas de Valencia y De la Espriella caen en un engaño al electorado al proponer eso como estrategia y política de combate a economías ilícitas, además de lo anticientífico de ignorar toda la evidencia generada de lo nocivo que es el glifosato para la salud humana y el ambiente.

No al glifosato

Cepeda manifiesta abiertamente su compromiso y desacuerdo con la utilización de herbicidas para reducir cultivos de coca, reconociendo las afectaciones que ese tipo de políticas ha tenido sobre la salud de comunidades rurales y ecosistemas fundamentales para el país y la región, como la Amazonía. López y Fajardo, en sus programas, no mencionaron una posición al respecto.

¿Descertificar al descertificador?

Esta campaña electoral se da bajo una circunstancia especial y es la descertificación del país por cuenta de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC al ser señalado por parte de Trump como “líder del narcotráfico” [1], sin prueba alguna. Este escenario ha generado tensiones importantes entre Colombia y los Estados Unidos, lo que tiene que ver directamente con la política de drogas de nuestro país y futuros apoyos de ese país a Colombia para combatir el narcotráfico. Por tal motivo los programas de gobierno de las y los candidatos a la presidencia exigía menciones a esa relación en particular porque puede reconfigurarse todo. Las posiciones más claras al respecto son las de Cepeda y Valencia, el primero con una apuesta de soberanía digna ante los abusos que Estados Unidos ha cometido en nuestro país y región por cuenta de la “guerra contra las drogas”, donde ese país ha utilizado esa doctrina como cortina de humo para posicionarse geoestratégicamente en Colombia y acceder a nuestros recursos naturales.

[1] BBC. (2025). Cuáles son los motivos que da Trump para sancionar a Petro y qué supone para el presidente de Colombia estar incluido en la “lista negra” de la OFAC de EE.UU. La fumigación aérea es un tema central y populista. Esta ya ha sido condicionada desde 2015 y desde entonces ningún gobierno ha podido cumplir con los requerimientos impuestos por la Corte Constitucional si se quiere reactivar. Iván Duque gastó sus 4 años de gobierno tratando de fumigar y no pudo hacerlo. En ese sentido las propuestas de Valencia y De la Espriella caen en un engaño al electorado al proponer eso como estrategia y política de combate a economías ilícitas, además de lo anticientífico de ignorar toda la evidencia generada de lo nocivo que es el glifosato para la salud humana y el ambiente.



Cepeda exige a los Estados Unidos un sentido de corresponsabilidad al gobierno norteamericano porque es Colombia quien ha puesto muertos y envenenado poblaciones y ecosistemas con herbicidas mientras en Estados Unidos no se hace nada para contener el consumo.

Valencia esta jugada a pedir la integración de Colombia al Escudo de las Américas y subordinar al país a los Estados Unidos a cambio de apoyo militar y tecnológico para combatir economías ilícitas y crimen organizado, relanzando un Plan Colombia 2. López y Fajardo no mencionan nada al respecto en sus programas y De la Espriella se limita a hablar de cooperación penal para extradiciones.

Lo internacional si cuenta

La diplomacia internacional en temas de drogas se aborda desde un sentido de poner a Colombia como líder y capaz de jalonar agendas regionales al respecto. Para Cepeda es importante alianzas con países como México, por ejemplo, para impulsar globalmente discusiones de la necesidad de superar el prohibicionismo y pasar a otros escenarios en materia de drogas, que tampoco explica muy bien cuales más allá de mencionar “regulación inteligente”, que no se entiende qué puede ser. Valencia y De la Espriella apuestan a relaciones profundas con Estados Unidos como su principal aliado internacional en el tema para cuestiones de asistencia militar y cooperación penal. López aboga por modificar el régimen internacional de drogas para desclasificar al cannabis y la hoja de coca; y acá vale la pena aclarar que el cannabis ya fue desclasificado de las listas de las convenciones de las Naciones Unidas desde el 2020[2]. Si queda la pelea por dar, nuevamente, sobre la desclasificación de la hoja de coca, la cual ojalá se dé desde una perspectiva de lo colombiano y no solo adhiriendo a lo de otros países, donde sus conflictos alrededor de la hoja son otros.

Los olvidos

En definitiva, las y los candidatos están jugados por posturas cómodas y ya conocidas en la opinión pública y territorios, por años han llegado campañas hablando de transformación territorial, sustitución, erradicación forzada o voluntaria y de inversión social. Todo eso está en bandeja en las distintas campañas y propuestas. Sin embargo, llama la atención los silencios y falta de propuestas sobre los debates abiertos sobre indicadores y formas de medir la política de drogas, los cultivos de hoja de coca y la producción potencial de cocaína, las apuestas de

[2] CNN. (2020). La ONU elimina el cannabis de la lista de sustancias más peligrosas. https://www-cnn-com.translate.google/2020/12/02/health/un-reclassifies-cannabis-scen-trnd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



regulación comunitaria de economías como el cannabis en el norte del Cauca o la posibilidad del impulso de pilotajes de regulación de economías como la de la cocaína. Estas son las discusiones, preocupaciones que laten en los territorios en lo que tiene que ver con política pública de drogas y economías regionales de coca, cocaína y marihuana con todas sus intersecciones con el conflicto armado. Acá importante también llamar la atención, por más de que economías de esta índole tengan intersecciones con el conflicto interno y sus soluciones tengan cruces con la paz, las políticas de paz deben desnarcotizarse, no pueden subordinarse mesas y negociaciones con actores armados en un futuro a que avancen programas de sustitución de cultivos, esto debe ser proceso de toda una agenda con esos actores y las comunidades de la transformación y construcción de paz social, ambiental y económica en sus territorios.

Ha quedado también en el olvido una hoja de ruta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad sobre narcotráfico, las cuales en su momento fueron una bandera importante del presidente Petro, y aunque se han ido diluyendo son un instrumento válido y legítimo que ofrece aportes para la construcción de una mejor política pública de drogas que pueda tener como base la garantía de derechos humanos, económicos, sociales y culturales.





Referencias

- Aberlardo de la Espriella. (2026). El milagro de los nunca.
<https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf>
- Claudia López. (2026). Una nueva historia de soluciones para la gente.
<https://claudia-lopez.com/wp-content/uploads/2026/04/Programa-Gobierno-Claudia-Lopez-Leonardo-Huerta.pdf>
- Iván Cepeda. (2026). El poder de la verdad.
<https://www.movimientopactohistorico.co/programa-gobierno>
- Sergio Fajardo. (2026). Cambio. Serio. Seguro.
<https://drive.google.com/file/d/1b0JOU1qalqmih9YdYbuWIDWQEAAvYWn7/view>
- Paloma Valencia. (2026). Firmeza para estabilizar. Corazón para transformar. Visión para el futuro.
https://palomavalencia.com/images/documentos/Plan%20Integrado%20de%20Gobierno%20Final_compressed.pdf

@indepaz

<https://indepaz.org.co/>